



Informe, en forma de propuesta de resolución, que se formula por el Asesor Técnico de Transparencia y Modernización Administrativa del Área de Organización y RR.HH, y se eleva a la Presidencia para su consideración y aprobación, si así lo estima oportuno, conforme a los antecedentes de hecho, normativa aplicable y consideraciones jurídicas que van a expresarse a continuación:

ANTECEDENTES DE HECHO

Con fecha de 9 de abril de 2019, a través de la sede electrónica, ha tenido entrada en el Registro de esta Diputación, una petición formulada por [REDACTED] con DNI número [REDACTED] en ejercicio del derecho de información pública, al amparo de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

En la citada petición solicita:

“Estoy interesada en un curso para realizar gestiones en la Plataforma de Contratación del Estado”.

Desde esta Unidad de Innovación Administrativa se ha contactado con el Departamento de Formación informándonos verbalmente que el único curso similar ofertado por esta Diputación es el de tramitación electrónica de expedientes de contratación y está dirigido a empleados públicos de la Diputación y Ayuntamientos de la provincia de Salamanca.

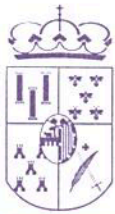
Tras ello, se ha contactado con la interesada telefónicamente quien nos manifiesta que es empleada del Ayuntamiento de Béjar y que está intentando solicitar el citado curso de tramitación electrónica de expedientes de contratación pero no consigue presentarlo, motivo por el que presentó la presente petición.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

La ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno tiene como objeto, según establece en su artículo 1 “Ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad, y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento”. A tal efecto, reconoce en su art 12 el derecho de acceso a la información pública de todas las personas, en los términos previstos en el artículo 105 b) de la Constitución, desarrollados por esta Ley”, así como en lo previsto en los artículos 13.d) y 53. a) de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas.

Determinando en el art 13 que “se entiende por Información Pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” regulación que desecha en todo momento otro tipo de informe o juicio de valor que pueda ser requerido por el solicitante de la información.

El objeto de la petición presentada por [REDACTED] no es solicitar información pública, sino que la interesada trata de presentar una solicitud para realizar



un curso de formación y no consigue presentarla, por lo que dicha petición se debe de inadmitir ya que su objeto no se corresponde con el concepto de información pública recogido en el artículo 13 de la Ley 9/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

En consecuencia y a la vista de lo expuesto, por quien suscribe se eleva la siguiente

PROPUESTA

Primero. Inadmitir la petición formulada por [redacted] en relación con la información relativa a su petición, por entender que la misma no se encuentra dentro del concepto de información pública recogido en el artículo 13 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la información y Buen Gobierno.

Segundo: Dar traslado de la solicitud presentada por [redacted] Sánchez al Departamento de Formación de esta Diputación Provincial como departamento gestor competente a los efectos oportunos.

Salamanca a 10 de abril de 2019.

EL ASESOR TÉCNICO DE TRANSPARENCIA
Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA



DECRETO DE LA PRESIDENCIA.- Vista la propuesta anterior y conforme con la misma, en uso de las atribuciones conferidas a esta Presidencia por el art 34 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, resuelvo en sus propios términos.

10 ABR. 2019

Dado en Salamanca, a _____, ante mí, el Oficial Mayor, por delegación del Secretario General, que doy fe.

EL PRESIDENTE

Por Delegación, Dec. 2342/15, de 6 de julio

Fdo.: José María Sánchez Martín

Ante mí,

EL OFICIAL MAYOR

